

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**

**MAGISTRADO PONENTE**  
**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

**Medellín D. E. de C., T. e I.<sup>1</sup>**, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés

Radicación n°.	05001-31-03-005-2016-00975-01.
Proceso.	Ejecutivo.
Demandante.	Citibank Colombia.
Demandado.	Nelson Sánchez Alzate.
Procedencia.	Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.
Decisión.	Revoca la sentencia apelada.
Temas.	De la prescripción extintiva de títulos valores con espacios en blanco y la época de su llenado.
Sentencia n°.	017-23
Rdo. Interno	064-17
Aprobación.	Proyecto discutido y aprobado en sesión virtual del 18 de mayo de 2023.

**I. ASUNTO A RESOLVER.**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala a resolver la apelación interpuesta por el ejecutado contra la sentencia de 15 de agosto de 2017, dictada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso ejecutivo de Citibank Colombia S.A. frente a Nelson Alberto Sánchez Alzate.

**II. ANTECEDENTES.**

**1.- LA DEMANDA.**

**1.1.- Lo pretendido.** Mediante escrito presentado el 31 de octubre de 2016, Citibank Colombia S.A. demandó a Nelson Alberto Sánchez Alzate para que, previo el trámite del proceso ejecutivo, se librara mandamiento de pago en favor suyo y en

<sup>1</sup> Acto Legislativo 01 de 2021, art. 1º. "La ciudad de Medellín se organiza como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación."

contra de éste, por la suma total de \$179.885.273,51 correspondientes al saldo insoluto de capital contenido en el pagaré número 02-00065684-03.

Adicionalmente, reclamó que el apremio se extendiera a los intereses moratorios *“generados en cada una de las obligaciones contenidas en el pagaré, a la tasa máxima legal permitida, según la Ley 510 de 1999”,* esto es, *“desde el 12 de octubre de 2016 que es la fecha desde la cual se encuentra en mora hasta la fecha de pago efectivo de la obligación”.*

Finalmente, requirió que se impusiera las costas del proceso al encausado (folio 33, cuaderno principal del expediente físico).

**1.2.- Los fundamentos fácticos.** En sustento de lo pedido, adujo que el señor Nelson Alberto Sánchez Alzate firmó, en su beneficio, el pagaré número 02-00065684-03, por un valor de \$179.885.273,51 como capital, con vencimiento el 12 de octubre de 2016, más intereses, en caso de mora, liquidados a la tasa máxima permitida por la ley.

Adicionalmente, expuso que el deudor se encontraba en mora pese a los múltiples requerimientos efectuados, y agregó que el título cumplía con los presupuestos legales; que se presume auténtico, y que contiene una prestación clara, expresa y exigible (folios 32 y 33, cuaderno principal del expediente físico).

## **2.- LA RÉPLICA.**

**2.1.- Las excepciones perentorias planteadas.** Librado el mandamiento de pago, conforme auto de 29 de noviembre de 2016 (fl. 37), y notificado el ejecutado desde el 7 de abril de 2017 (ver folio 27, cuaderno principal del expediente físico), éste se pronunció planteando las excepciones perentorias que denominó *“llenado inidóneo del título valor”, “prescripción”, y “caducidad”.*

**2.2.- Fundamento fáctico de las defensas.** En suma, argumentó que la pretensora *“estaba en la obligación legal y contractual de respetar las obligaciones contractuales pactadas al momento de vincularse mi poderdante con el BANCO CITIBANK COLOMBIA S.A., no pudiendo éste, a su amaño, llenar los espacios en blanco del pagaré con fecha diferente a la reportada por el banco en los extractos bancarios, en la que lo requería para el pago por estar en mora”.*

En tal virtud y citando apartes de la carta de instrucciones, arguyó que *“a partir del incumplimiento de una obligación el BANCO CITIBANK COLOMBIS S.A. estaba facultado para llenar los espacios en blanco y declarar la caducidad de las demás obligaciones existentes, dando aplicación a la cláusula aceleratoria, mandato constitucional que no cumplió”*.

Además, sostuvo que el término de tres años, previsto en el canon 789 del C. de Comercio, como de prescripción de la acción cambiaria, se encuentra satisfecho, contado desde los requerimientos efectuados por el Banco.

Y respecto de la caducidad, estimó que el ejecutante *“no puede enmaletar los títulos valores dados como garantía de pago de sus obligaciones, los mismos deben ser llenados y elaborados al momento en que efectivamente y según los registros contables se determine a ciencia cierta cuándo el cliente o deudor entró en cesación de pagos o de mora para introducir en el pagaré la fecha de vencimiento”*.

En otras palabras, consideró que el Banco tenía tres años para llenar el título, pero como no lo hizo *“caducó su derecho a llenar el mismo, por lo que a la fecha del 12 de octubre de 2016 no se encuentra dentro del término en que debía llenarse el pagaré”* (fls. 51 a 62, cuaderno principal, expediente físico).

### **3.- LA SENTENCIA APELADA.**

**3.1.- La decisión de primer grado.** En sentencia de 15 de agosto de 2017, el *a quo* declaró no probadas las excepciones ya descritas; ordenó seguir adelante la ejecución; dispuso el remate de los bienes embargados, previo avalúo, y condenó en costas al ejecutado, señalando como agencias en derecho la suma de \$8.000.000 (ver folios 282 y 283, cuaderno principal, expediente físico).

**3.2.- Las motivaciones del a quo.** Después de referirse al proceso y al título ejecutivo, consideró el Juzgado que el pagaré allegado cumplía los presupuestos de ejecutividad consagrados en el canon 422 del Código General del Proceso. En punto a las defensas, adujo que la prescripción no estaba configurada, dado que, observando el cartular, así como la carta de instrucciones, era posible colegir que *“el Banco queda ‘facultado para determinar la fecha de otorgamiento del pagaré, que corresponderá al día en que éste sea llenado. Igualmente determinará la fecha de vencimiento de las obligaciones que en él se incorporen. Para las obligaciones que se declaren de plazo vencido, esta fecha será la misma de*

*otorgamiento del pagaré'. Se desprende con meridiana claridad que la entidad demandante ejerció su derecho como acreedor al diligenciar el pagaré ya citado, apegado estrictamente a lo autorizado por Sánchez Alzate, pues en razón de esa facultad el demandante tomó como fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2016", a lo cual agregó que "el demandado no probó que la carta de instrucciones se hubiese modificado". Y señaló que con la presentación de la demanda se interrumpió el término de prescripción, por lo que la defensa no podía prosperar.*

Además, arguyó que el tenedor legítimo del título estaba habilitado para llenarlo antes de presentarlo para su cobro, conforme a las instrucciones dejadas, y si alguien alega lo contrario debe acreditar el desconocimiento y desviación de las instrucciones, lo que omitió el acá accionado, razón por la cual se debía desechar esta defensa.

Frente a la caducidad, simplemente dijo que no aplicaba, en tanto el Banco, actuando como tenedor del título, completó los espacios en blanco antes de la presentación para el pago. Es más, concluyó que el pagaré había sido llenado conforme las instrucciones dejadas (min. 21:42 a 32:08, CD anexo, archivo 2).

#### **4.- LA APELACIÓN.**

**4.1.- Los reparos concretos del ejecutado.** Censuró el apelante que el Juzgado había desconocido las pruebas documentales aportadas por el demandado, pero expedidas por el Banco, conforme las cuales el ejecutante, desde 2009, tenía clara la fecha de vencimiento de la obligación, pero *"engavetó"* el documento por 7 años, anotando como fecha de vencimiento el mismo año de presentación de la demanda. Y dijo que la declaración de parte evidencia que al deudor le decían que el crédito vencía en el año 2011. Por consiguiente, el Banco no usó la cláusula aceleratoria y, por el contrario, dejó vencer completamente el término de pago. En ese sentido, anotó que debían prosperar las excepciones propuestas (min. 32:13 a 35:45 *ibídem*).

**4.2.- La sustentación de los cargos.** En memorial allegado a esta Corporación en el término de traslado brindado para sustentar los cargos formulados ante el Juzgado, el demandado arguyó que, en las obligaciones a plazo, donde se pacta la denominada cláusula aceleratoria, una vez el deudor entra en mora de pagar sus compromisos, el acreedor queda facultado para demandar. En esa medida, cuando el encausado omitió la solución de los instalamentos, el Banco

debió proceder a completar el pagaré *“haciendo exigible el pago total de las obligaciones vencidas, desde el mismo momento en que se hicieron exigibles las mismas, pues ya le asistía el derecho y la legitimación en la causa para demandar, no pudiendo guardar los mismos por más de 6 o 7 años, para llenarlos a su amaño, pues dicho proceder va en contravía del principio de la confianza legítima”*.

Así las cosas, dijo que, al haber sido requerido por el Banco, lo cual brinda certeza de que estaba convencido del incumplimiento suyo, el Banco debió llenar el título, ya que *“pasados los tres años, de haber incurrido en mora, el pagaré no solo no se podía completar ni llenar, lo que generó en éste que la obligación ya había prescrito”* (archivo 04, expediente digital, segunda instancia).

### **III. CONSIDERACIONES.**

**1.- PRESUPUESTOS PROCESALES.** Efectuado el control de legalidad del proceso, la Sala advierte satisfechos los presupuestos procesales, tales como demanda en forma; competencia del Juzgado; capacidad para ser parte, para comparecer al proceso, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no advierte configurado un vicio genitor de invalidez, ni motivo alguno para abstenerse de resolver de mérito este asunto.

**2.- SISTEMÁTICA DE RESOLUCIÓN DE LOS EMBATES.** De cara al sistema de pretensión impugnaticia, aplicable en materia de apelación de sentencias, en los términos de los artículos 322 y 328 del Código General del Proceso, establecerá la Sala sí, como lo señaló el a quo, la prescripción debía observarse únicamente respecto al cambial y la carta de instrucciones, anexos como base de recaudo, o sí, como lo indica la censura, se debía observar otras pruebas, demostrativas de la prescripción alegada.

#### **3.- LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA.**

**3.1.- Interrupción de la prescripción extintiva.** Ha sido tradición en el derecho patrio, acuñar la frase según la cual los términos precluyen, las acciones caducan y los derechos prescriben, en orden a denotar que todos ellos, por vías distintas, tienen prevista una finalización por el paso del tiempo y la inercia en su utilización. De ese modo, el derecho de crédito, documentado y probado en un título ejecutivo o literalmente, incorporado en un título valor, está llamado a extinguirse por el fenómeno de la prescripción; pues ésta, además de consagrarse como un

modo de adquirir las cosas ajenas, también se previó para *“extinguir las acciones o derechos ajenos, por (...) no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales”*, según lo estimó el creador legal en el artículo 2512 del Código Civil.

De lo anterior se desprende que cuando el titular de un derecho personal, no obstante su exigibilidad, omite su reclamo oportuno, o no cumple las cargas procesales, como la de notificar a tiempo el auto admisorio de la demanda o el mandamiento de pago al deudor, le permite a éste alegar, como que es excepción propia, la prescripción que la ley sustancial consagra a su favor; desde luego, apoyado en la desidia, descuido o simple lentitud del acreedor en hacer valer la prestación existente a su favor.

Dicho de otro modo, el término de prescripción corre desde la exigibilidad de la obligación, cual se desprende de consultar el sentido, contenido y alcance de los artículos 781 y 789 del C. de Comercio en tratándose de títulos valores, pero ello no supone que dicho fenómeno corra fatalmente sin que nada lo detenga, sino que transcurre mientras haya total apatía del acreedor; pues, en la medida en que se enarbole una pretensión de reclamo, dada a conocer oportunamente, o exista un reconocimiento del derecho por parte del deudor (art. 2539 del C. Civil), la prescripción se deshace, por la interrupción generada, ya civil, ora natural.

Así, es claro que los términos prescriptivos se pueden interrumpir de cualquiera de las dos formas mencionadas, cuyo resultado no es otro que borrar o eliminar lo que del término hubiese corrido, y aunque se puede pensar que el cómputo inicia nuevamente, imposible resulta predicar dicho fenómeno en medio del proceso judicial, pues la interrupción civil que éste supuso mantiene sus efectos mientras subsista el trámite, que en un estado normal de cosas terminará con la solución o cumplimiento efectivo de la acreencia.

Por consiguiente, no aplica ni debe prosperar la prescripción del derecho de crédito, ejecutivo o cambiario, frente a quien introduce la pretensión de cobro antes de que se completen los cinco años, en el primer caso (art. 2536 del C. Civil modificado por el 8° de la Ley 791 de 2002), o los tres años, en el segundo (art. 789 del C. de Co.), contados desde que la obligación se hizo exigible, y vincula a los obligados dentro del año siguiente a la noticia que el demandante reciba del apremio, dado que, en esa situación, la interrupción opera desde la misma presentación de la demanda, lo que en manera similar acontece cuando, pese a

vencerse la aludida anualidad, de todos modos el acreedor logra vincular al deudor antes de que se complete el término de prescripción correspondiente, como así lo previó el legislador en el canon 94 del Código General del Proceso.

En cambio, se podrá alegar la prescripción extintiva y ésta resultará avante cuando el lapso respectivo corre sin que se presente interrupción, suspensión o renuncia a ella. O sea, si no se demanda a tiempo, o se notifica vencido el término, y no se observa reconocimiento alguno, la prescripción estaría configurada y se podrá decretar en la medida en que se proponga (art. 282 del C.G.P.).

### **3.2.- Títulos valor con espacios en blanco. / Término para completarlo.**

#### **3.2.1.- El artículo 622 del Código de Comercio dispone:**

*“Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.*

*Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor, dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello.*

*Si un título de esta clase es negociado, después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y efectivo para dicho tenedor y éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas.”*

De este texto surge con total claridad que se puede firmar un documento con espacios en blanco –llenado parcialmente al momento de ser firmado por quien lo suscribe– o totalmente en blanco, siempre que sea emitido, esto es, entregado, con la clara intención de “convertirlo en un título-valor”; pero, para que pueda llegar a ser título valor, deberá ser llenado en aquellos espacios dejados en limpio “conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado”. Sólo bajo tal condición, legalmente impuesta, y que constituye norma imperativa, nace a la vida jurídica el título valor, con plenitud de efectos; dicho en sentido contrario, si no se siguen las instrucciones dadas, el documento le resulta inoponible al suscriptor que dejó las directivas, al menos en los datos omitidos, o frente a los cuales éstas no se hubieran seguido.

**3.2.2.-** Ahora bien, los títulos valores en blanco pueden prescindir del señalamiento de la forma de vencimiento de la prestación, o del lugar o la fecha de

pago, así como de la naturaleza de las prestaciones y del valor adeudado. Cuando ocurre esto último, esto es, que el título valor en blanco permita verter varias obligaciones que el deudor haya adquirido con el acreedor, pasadas, presentes o futuras, el cartular termina cumpliendo una función de garantía de pago de ese número plural de obligaciones pendientes.

No obstante, lo anterior, en la doctrina se ha discutido la posibilidad de entregar un título del linaje descrito en garantía de un crédito, pues para algunos ese destino no tiene sustento normativo y, así entendidas las cosas, una interpretación positiva de esa condición de circulación sería *contra legem*. Sin embargo, otro sector ha entendido que los títulos de contenido crediticio sí pueden servir de caución de un vínculo obligacional. Por ejemplo, el profesor Bernardo Trujillo Calle explica:

*“No debe confundirse el acto jurídico de dar un pagaré en prenda con el denominado por algunas legislaciones ‘pagaré prendario’, pues mientras los pagarés dados en prenda, como puede darse con cualquier otro título valor al tenor del precitado artículo 659 son entregados por el deudor a su acreedor en garantía sin requerir registro y constituyen por eso la misma garantía prendaria, según palabras de BONFANTI y GARRONE, los otros son verdaderos títulos sometidos a ciertas disciplinas jurídicas que nosotros nos proponemos analizar en la parte especial de esta obra. Por lo demás, son muy conocidos los pagarés prendarios que utiliza en sus operaciones de crédito la banca nacional los cuales sí se registran. Claro que un pagaré prendario también puede darse en prenda mediante un endoso, sin que sea el único mecanismo, ya que también la prenda, la garantía prendaria se puede formalizar mediante documento distinto al título, que también se registra, pero sin constituir al acreedor un tenedor con posición autónoma.”<sup>2</sup>*

Ahora bien, el artículo 1200 del C. de Comercio establece que puede gravarse con prenda toda clase de bienes muebles, calidad que tienen los títulos valores, dado que su regulación se encuentra en el libro tercero de dicha codificación, dedicado precisamente a “LOS BIENES MERCANTILES”. Además, el artículo 1173 *ibídem*, referente al depósito de dinero en garantía consagra que “cuando se deposite una suma de dinero en garantía del cumplimiento de una obligación, el depositario sólo estará obligado a hacer la restitución en cuanto al exceso del depósito sobre lo que el deudor deba pagar en razón del crédito garantizado”. De esta norma surge que, si puede entregarse en garantía dinero en efectivo, no resultaría lógico pensar que no pueda hacerse lo propio con cualquier título valor de contenido crediticio, incluyendo los pagarés.

---

<sup>2</sup> Trujillo Calle, Bernardo. De los Títulos Valores, tomo I. Pág. 128.



**3.2.3.-** Pues bien, si en muchas ocasiones los títulos valores en blanco, consagrados en el canon 622 del C. de Comercio trasuntado, se expiden en garantía de una pluralidad de prestaciones insolutas, se debe analizar, de cara a la prescripción extintiva, si está le aplica literalmente al cambial o si apunta a las obligaciones garantizadas.

Memórese inicialmente que, la caducidad ataca la acción y no el derecho, mientras que la prescripción extingue tanto la acción como el derecho, en ambos casos, atribuible al vencimiento de ciertos plazos sin que se ejercite la acción correspondiente, o sea que la prescripción abarca el derecho ejercido en el proceso. Empero, ¿cuál es el derecho que se hace valer en un proceso ejecutivo, cimentado en un título valor en blanco? Vale decir, ¿es el derecho literal y autónomo consignado en el documento, o será el crédito originario y fundamental del cambial?

Para la Sala, en principio, la prescripción debe analizarse en torno al derecho literal y autónomo consignado en el título valor, compaginando de ese modo lo consignado en los artículos 626 y 789 del C. de Comercio. Sin embargo, ello resulta aplicable, sin ambages, a los títulos valores suscritos y entregados completos, pero los títulos valores en blanco o con espacios en blanco no parecen atender los mismos postulados, salvo que el documento hubiese circulado a otro tenedor de buena fe, exenta de culpa, y éste, por la autonomía cambiaria, se aproveche de las mismas reglas de prescripción.

Es decir, en el primer supuesto, título valor suscrito y entregado completo, la prescripción de tres años, previsto en el citado canon 789 del C. de Comercio, se debe contar desde la fecha de vencimiento señalada en el título, lo que en manera similar acontecería para los casos de títulos valores en blanco que se hayan endosado a terceros de buena fe. Pero con relación a los títulos en blanco que no han circulado, la prescripción debe analizarse con relación a la prestación subyacente al título valor, en los términos originales de esa prestación y no conforme a los extremos señalados en el cambial.

Nótese que el título aseguraba el pago de varias prestaciones, que sólo al final, cuando el documento es integrado, se llevan a éste, pero sin que ello signifique computar un nuevo término de prescripción, dado que a las obligaciones originarias también les corre un periplo extintivo, el cual se puede interrumpir o suspender, pero completado, únicamente se puede renunciar, expresa o tácitamente.

Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC177213 de 20 de octubre de 2017, señaló:

*“(...) esta Corte debe precisar, frente a la prescripción extintiva, existen tres figuras que afectan su materialización y sus efectos jurídicos, a saber: la interrupción, la suspensión y la renuncia (arts. 2539, 2541 y 2514 del Código Civil).*

*Los primeros dos fenómenos requieren para su concretización que se generen antes de la consumación del término extintivo; mientras, el tercero exige todo lo contrario, sólo podrá presentarse después de operar la prescripción.*

*La interrupción se predica cuando el deudor reconoce, tácita o expresamente el débito, o cuando se instaura demanda judicial sin haberse consumado la prescripción. La suspensión se da en favor de los sujetos enunciados en el numeral primero de la regla 2530 del Estatuto Sustantivo Civil, es decir, para ‘(...) los incapaces y, en general, (...) quienes se encuentran bajo tutela o curaduría (...)’. Finalmente, la renuncia se configura si el obligado acepta la acreencia o reconoce el derecho de forma tácita o expresa, tras hallarse consolidada o consumada la prescripción, por haberse completado o expirado el término prescriptivo.*

*Ahora bien, la interrupción y la renuncia generan como consecuencia que el lapso prescriptivo empiece a contabilizarse nuevamente, reiniciándose los cómputos. En tanto, la suspensión, como su nombre lo indica, solamente detiene el conteo del tiempo sin reiniciarlo.”*

Entonces, la interrupción puede ser civil o natural, pero la primera opera cuando se presenta la demanda y se notifica oportunamente al deudor demandado. Esa es la forma más común de interrupción civil, de manera que si a la prestación le corrió el término de prescripción completamente no es posible interrumpirlo, así como no es posible revivirlo o volverlo a contar, por ejemplo, completando el título entregado con espacios en blanco para que, ese lapso vuelva a contarse desde el vencimiento impreso en el documento, una vez integrado.

Dicho en otras palabras, cuando se está en presencia de un título valor con espacios en blanco, emitido en garantía de una serie de obligaciones, presentes, pasadas o futuras, son éstas las que comportan el derecho de crédito, respecto del cual se ausculta la prescripción, todo lo cual conlleva señalar que el título entregado en garantía, con espacios en blanco no se puede llenar en cualquier tiempo, sino que ello debe acontecer en un término razonable, esto es, como mínimo, antes de que se configure la prescripción del débito originario o subyacente al título.

En definitiva, cuando se expiden títulos en blanco o con espacios en blanco y se dan las directrices para su llenado, es claro que, si uno de los faltantes corresponde a la prestación insoluta, deben señalarse o al menos inferirse, los motivos para proceder a completarlo, los cuales, con directa relación a la obligación,

muy seguramente aluden a su impago, a la persecución de similar crédito por un tercero, o al peligro de no poderlo recaudar, es decir, se llena cuando ese derecho personal subyacente está incumplido o se puede perder, lo cual pone de presente que el título se vincula con ese crédito, a tal extremo que la prescripción se analiza con relación a ese compromiso y, por excepción, en lo tocante al título, pero, siempre y cuando, el llenado se haga antes de la prescripción de la obligación original, como una especie de interrupción civil, por requerimiento, asemejándolo a la presentación del título para su pago, pero lo que no es posible es dejar que se complete el plazo extintivo de la deuda original, para proceder a llenarlo, dado que, para ese momento no es viable ningún tipo de interrupción, ni siquiera aludiendo al aviso que significa el llenado y la presentación del cambial para su pago.

Lo anterior cobra relevancia en cuanto al término para completar el cambial, puesto que, aunque es un ítem no regulado en la legislación comercial, en otras normativas se asemeja ese plazo al de prescripción de la obligación consignada en el título, lo cual resulta lógico, pues la inserción de una prestación en un título con espacios en blanco supone que ésta sea exigible y no tenga plazo prescriptivo completo. Si lo tiene no debería ser llevado al título porque su inclusión en el documento no puede significar el computo de un nuevo lapso prescriptivo.

Al respecto, el tratadista Trujillo Calle expone:

*“Ya se ha dicho que tampoco el Código le ha dado al tenedor un plazo dentro del cual deba estar el título debidamente integrado para seguir en punto tan delicado lo que ya las legislaciones de muchos países pertenecientes al área de la LUG han definido, casi todas aceptando el plazo de tres (3) años a partir de la emisión, so pena de caducidad. Esto es lo que parece más ajustado a la naturaleza del derecho cambiario, partiendo de la base de que es en ese mismo término en el cual prescriben las acciones directas, a partir del vencimiento, porque lo demás sería un salto atrás, a las abandonadas tesis de BERSTEIN y STAUB, que al decir de CÁMARA consideraban dichos plazos de caducidad de treinta (30) años, o inalcanzables (imprescriptibles dice la doctrina). De todas maneras, el llenado debe hacerse antes de la prescripción para que surten sus efectos.*

*Aunque la intención de la comisión redactora del Código fue dejar este punto abandonado a la voluntad del tenedor, tal posición es insostenible jurídicamente.”<sup>3</sup>*

Por todo lo anterior, la integración del título expedido en blanco o con espacios en blanco debe hacerse antes de que se cumpla del término de prescripción de la obligación originaria, pues de lo contrario habría caducidad, dice

---

<sup>3</sup> Ob. Cit. Pág. 478.

la doctrina, o al menos se podría plantear la prescripción, con marcada posibilidad de triunfo.

#### **4.- CASO CONCRETO.**

**4.1. Síntesis de la postura del Juzgado y del censor.** Recordemos que el Juzgado negó la prosperidad de la excepción de prescripción, alegada por el encasado, ya que la demanda había logrado su interrupción, teniendo en cuenta que el plazo es de tres años, antes de los cuales se presentó la demanda y se el ejecutado se notificó del mandamiento de pago, dentro del año siguiente a la noticia recibida por el ejecutante.

En cambio, la apelación se fundamenta en que en el pagaré se enlistaron obligaciones que se encontraban prescritas para cuando se integró el título, todo lo cual deriva de prueba documental que dice no haber valorado el Despacho de primer grado.

**4.2.- Estudio de la prueba documental.** Sea lo primero, indicar que en el minuto 12:05 de la audiencia concentrada, el Juzgado decretó, como pruebas de la parte demandada, los documentos anexos a la formulación de los exceptivos. Dentro de ellas, mencionó los derechos de petición elevados por el convocado y las respuestas dadas por el Banco pretensor.

Igualmente, es pertinente memorar que el pagaré allegado como base de recaudo fue expedido con espacios en blanco e instrucciones para ser completado, como se puede inferir del cuerpo del título y así lo entendió el a quo, sin contradicción del Banco (min. 4:01 CD anexo, archivo 2). En las directrices se estipuló expresamente que al cambial se llevaría *“el capital adeudado por mi (nosotros) será el que arrojen los libros de contabilidad de CITIBANK COLOMBIA S.A., tanto respecto de las obligaciones en moneda legal como en moneda extranjera, existentes al momento en que sea llenado el pagaré objeto de las presentes instrucciones (...).”* y se dijo también: *“Se incorporarán al pagaré firmado con espacios en blanco objeto de estas instrucciones todas las obligaciones existentes con el CITIBANK COLOMBIA S.A. que figuren a mi (nuestro) cargo, al momento de llenarse dicho pagaré (...).”* (fl. 1 vto., cuaderno principal).

O sea que en el pagaré se verterían todas las obligaciones pendientes de pago, que tuviera el señor Nelson Alberto Sánchez Alzate con Citibank Colombia

S.A., lo que efectivamente hizo la entidad, cuando en el texto del cartular describió las siguientes obligaciones:

*“Obligación 132106251303, por un capital de \$54.456.973,10, con fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2016. Obligación 4988619000253083, por un capital de \$28.826.036,94, con fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2016. Obligación 5434481000282472, por un capital de \$30.128.663,47, con fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2016. Obligación 886908032, por un valor de \$66.473.600,00, con fecha de vencimiento el 12 de octubre de 2016” (fl. 1, cuaderno principal).*

Siendo ello así y analizando literalmente lo que señala en pagaré, se podría concluir que los tres años, contemplados en el precepto 789 del C. de Comercio, se contarían a partir del 12 de octubre de 2016, es decir, se habrían de cumplir el 11 de octubre de 2019, pero como en ese momento el ejecutado se encontraba notificado del apremio, específicamente desde el 7 de abril de 2017 (fl. 47), inclusive, antes de cumplirse el año mencionado en el canon 94 del Código General del Proceso, es notorio que, bajo este análisis, la demanda habría interrumpido civilmente la prescripción y, en esa medida, la excepción planteada estaba condena al fracaso.

Sin embargo, es de ver que en el expediente obra una misiva, expedida por la Oficina de Servicio al Cliente de Citibank Colombia S.A., conforme con la cual, a 22 de marzo de 2017, la obligación identificada con número 986908032 tenía 2721 días en mora; la obligación identificada con número 132106251303 tenía 2804 días en mora; la obligación 6434481000282472 tenía 2805 días en mora, y la obligación 4988619000253083 tenía una mora igual a 20805 días (fl. 69, cuaderno principal). De ahí que, para el 12 de octubre de 2016, fecha consignada en el pagaré, como de creación y vencimiento, dichas prestaciones tuvieran, siguiendo el mismo orden, 2561, 2644, y 2645 días en mora, o sea, 7,0164 años para el primer caso, 7,2438 años en el segundo, y 7,2465 años en el último evento.

Significa lo anterior que pese a existir un motivo expreso para llenar el pagaré en blanco, esto es, *“falta de pago oportuno de capital de cualquiera de las obligaciones provenientes de los productos y/o servicios ofrecidos por el Banco (...)”* (fl. 1, cuaderno principal), la Entidad convocante esperó poco más de siete años para proceder a su integración y a su cobro. Es decir, llenó el título habiéndose satisfecho completamente el término de prescripción de esas obligaciones, lo cual significa, siguiendo la doctrina citada, que había caducado la oportunidad para llenar el título entregado con espacios en blanco, en garantía de obligaciones presentes o

futuras, o se habrían incorporado al pagaré prestaciones con término de prescripción cumplido.

En este orden, independientemente de la conclusión, lo cierto es que se está exigiendo el pago de prestaciones prescritas y, en esa medida, habiéndose planteado la excepción, era ostensible su procedencia, razón por la cual se comparte la visión del censor en la formulación de la apelación, sus reparos y la sustentación correspondiente.

#### **IV. CONCLUSIÓN GENERAL.**

En suma, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará probada excepción de prescripción extintiva; se ordenará cesar la ejecución; se levantarán las cautelas, y se condenará en costas al ejecutante, en ambas instancias.

En la cuantificación concentrada de las costas, que realizará el a quo, se deberá incluir el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes como agencias en derecho, correspondientes a esta instancia, cantidad que acata lo consignado en el Acuerdo PSAA16-10554, artículo 5, numeral 4, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

#### **V. DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **REVOCA** la sentencia apelada, de fecha, contenido y procedencia descritas y, en su lugar,

#### **RESUELVE.**

**PRIMERO. SE DECLARA PROBADA** la excepción de prescripción de la acción cambiaria, planteada por el demandado en el proceso ejecutivo de Banco Citibank Colombia S.A. frente a Nelson Alberto Sánchez Alzate.

**SEGUNDO.** Como consecuencia de lo anterior, **SE ORDENA** cesar la ejecución de Banco Citibank Colombia S.A. frente a Nelson Alberto Sánchez Alzate.

**TERCERO. SE DISPONE** el levantamiento de las cautelas decretadas y practicadas. El Juzgado librará los oficios pertinentes.

**CUARTO. COSTAS** a cargo de la parte ejecutante. En su cuantificación concentrada, que realizará el a quo, se deberá incluir el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes como agencias en derecho, correspondientes a esta instancia.

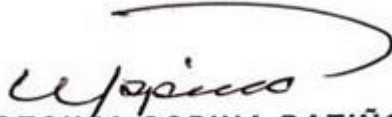
**NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE**



**MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO**

**Magistrado**

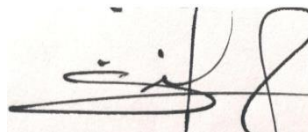
*Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022*



**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

**Magistrada**

*Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022*



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

**JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO**

**Magistrado**